

El medio ambiente en Colombia y el posconflicto: nuevos retrocesos por la pandemia mundial

*Torsten Krause**, *Ana Maria Vargas Falla***, *Britta Sjöstedt**, *Sandra Valencia****, *Fariborz Zelli*¹*

Un destello de esperanza que desaparece rápidamente

En 2016, Colombia salió oficialmente de uno de los conflictos armados internos más largos del mundo cuando el gobierno colombiano, bajo el expresidente Juan Manuel Santos, firmó un acuerdo de paz con el grupo guerrillero más grande e influyente del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército Popular, también conocido como FARC.

Han pasado ya cuatro años y aunque algunos de los departamentos de Colombia han podido disfrutar de un tiempo relativamente tranquilo con la desmovilización de las FARC y el cese de las hostilidades y la violencia, otros departamentos y áreas rurales se han alejado aún más de la paz. Durante décadas, las FARC habían ejercido una autoridad estatal *de facto* con reglas y regulaciones en los territorios que antes estaban bajo su control. Sin embargo, desde octubre de 2016, cuando las FARC se retiraron de estos territorios como parte del proceso de desmovilización, el vacío ha sido llenado en muchos casos por una amplia gama de nuevos grupos armados, incluidas pandillas o bandas criminales. Estas bandas criminales, referidas por las autoridades locales como BACRIM², han estado tratando de tomar el control de los lucrativos mercados informales, incluidos los comercios de coca y oro. Además, el vacío de poder fue llenado por otros grupos guerrilleros que han estado luchando contra el estado colombiano durante décadas. Estos incluyen, principalmente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN)³, pero también exguerrilleros de las FARC que rechazaron o abandonaron el proceso de reintegración y formaron grupos disidentes de las FARC.

Hasta ahora, el resultado de estos desarrollos es una mezcla compleja de grupos armados violentos, todos los cuales se benefician financieramente del vacío de poder. Si bien algunos de ellos, como el ELN, afirman perseguir objetivos políticos más amplios, lo que todos estos grupos tienen en común es su *modus operandi*, que implica un cóctel peligroso de prácticas ilegales, violencia e intimidación de las poblaciones locales, incluidos los campesinos, líderes

¹ Afiliación: *Universidad de Lund, **Centro Internacional Sueco de Democracia Local, *** Chalmers Universidad de Tecnología.

² En su nomenclatura de 2016, el Ministerio de Defensa (a través de la Directiva permanente 15 de 2016) distinguió oficialmente las Bandas Criminales (Bandas Criminales - BACRIM) de los Grupos Armados Organizados (Grupos Armados Organizados - GAO) y los Grupos de Delincuencia Organizada (Grupo Delictivo Organizado - GDO)

³ Ha habido varios intentos de sostener negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y el ELN. En octubre de 2016, ambas partes anunciaron el inicio de conversaciones de paz, que comenzaron oficialmente en febrero de 2017 en Quito, Ecuador. Sin embargo, las conversaciones enfrentaron varios obstáculos, incluido que el ELN se negó a liberar a los rehenes secuestrados. El presidente Ivan Duque canceló las negociaciones después de que el ELN atacó una escuela militar en Bogotá, matando a 21 personas e hiriendo a 68 en enero de 2019.

sociales, organizaciones no gubernamentales (ONGs) internacionales y locales, así como grandes corporaciones multinacionales.



Imagen 1 - Granja dirigida por exguerrilleros de las FARC, municipio de Puerto Guzmán, departamento de Putumayo, diciembre de 2019. Foto tomada por Torsten Krause

Las consecuencias repercuten una vez más en las regiones rurales de Colombia en forma de desplazamientos forzados de miles de familias principalmente en los departamentos de Antioquia, Caquetá, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Santander. Cientos de civiles han sido asesinados, incluidos numerosos líderes sociales e indígenas que exigían el acceso a la tierra y los recursos, defendían los derechos de los pueblos indígenas, trataban de defender a las comunidades de la minería ilegal y el tráfico de drogas, participaban en iniciativas de

erradicación de la coca, o protegían el medio ambiente de las prácticas mineras contaminantes y la tala ilegal⁴. Este continuo conflicto le ha valido a Colombia el segundo y tercer lugar, respectivamente, entre los países con el mayor número de asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales y ambientales en los últimos cuatro años (Witness 2017, 2019, UN 2020).

Una nueva víctima: el medio ambiente

Por lo tanto, si a rápida vista podría parecer que el conflicto armado colombiano ha llegado a su fin, la realidad es que la vida de muchas personas en las zonas rurales está marcada por una nueva ola de violencia despiadada e intimidaciones. Lo nuevo de esta fase de violencia es que las víctimas incluyen no solo seres humanos, como agricultores, líderes sociales y pueblos indígenas, sino también el medio ambiente y sus ecosistemas naturales. Desde el cese al fuego entre las FARC y el estado colombiano en 2014 y la firma del acuerdo de paz en 2016, la deforestación en Colombia se ha disparado y existe una fuerte superposición entre las áreas que registran altos niveles de violencia desde el acuerdo de paz y las que exhiben conversiones ilegales de bosques a usos de tierras agrícolas, pastizales para ganado y plantaciones de coca (Prem et al.2018, Negret et al.2019, Clerici et al.2020, Murillo Sandoval et al.2020). En particular, los departamentos fronterizos amazónicos de Colombia están experimentando un fuerte aumento de la deforestación (ver Fig.1) (Clerici et al. 2020).

⁴ Según datos de enero de 2020 de la Defensoría del Pueblo de Colombia, se estima que 555 líderes sociales fueron asesinados desde 2016 (<https://www.defensoria.gov.co/es/nube/enlosmedios/8996/Al-menos-555-1%C3%ADderes-sociales-han-sido-asesinados-entre-2016-y-2019-Defensor%C3%ADa-del-Pueblo.htm>).

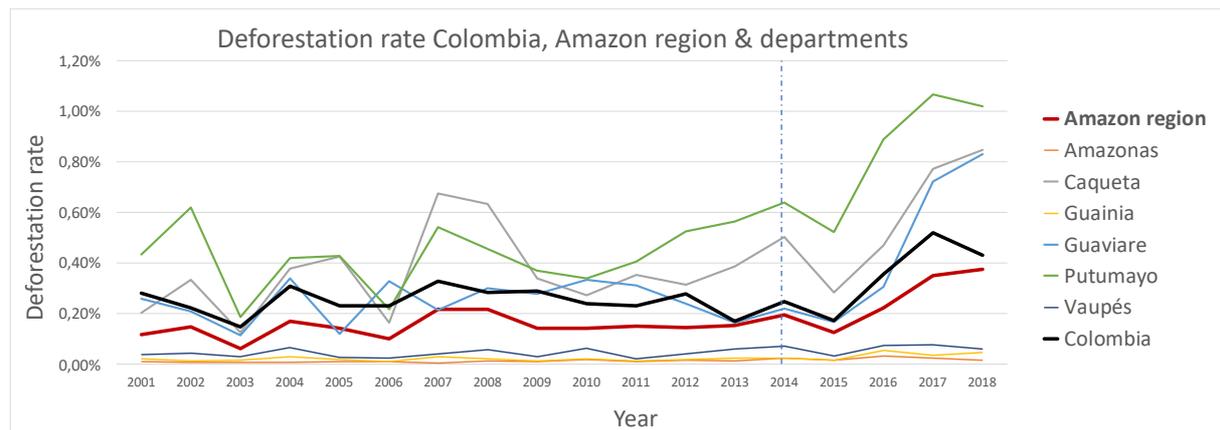


Figura 1 - Tasas de deforestación en Colombia, la región amazónica y los departamentos amazónicos. La línea vertical punteada en 2014 indica el año en que se acordó el cese de fuego indefinido entre las FARC y el gobierno colombiano. Fuente: Global Forest Watch 2020.

Para empeorar y complicar aún más la situación, las organizaciones ambientales y sociales también se están convirtiendo en blanco de intimidación y violencia. Un folleto reciente que se hizo circular, supuestamente por un grupo disidente de las FARC, envía una advertencia a cualquiera que colabore con organizaciones que trabajan en proyectos ambientales en el Amazonas colombiano y otras regiones. El folleto menciona explícitamente organizaciones internacionales (como la Organización de Estados Americanos - OEA y USAID), programas nacionales para combatir la deforestación (Visión Amazonía), instituciones de investigación (Instituto Colombiano de Investigación Científica Amazónica - SINCHI), autoridades ambientales regionales (en particular, la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Amazonía Norte y Oriental - CDA; y Corpoamazonia), así como la Autoridad de los Parques Nacionales de Colombia (Infoamazonia, 16 de abril de 2020)⁵. En los últimos meses, los guardaparques nacionales han sido cada vez más atacados por grupos armados, algunos han sido asesinados, mientras que otros tuvieron que abandonar sus puestos en muchos de los parques nacionales de la región andina-amazónica, incapaces de controlar la intrusión y la deforestación.

Solo en los últimos meses, la deforestación se ha vuelto a disparar considerablemente, y es particularmente severa en los parques nacionales Tinigua y La Macarena en el departamento de Meta, así como en la reserva indígena Nukak en el departamento de Guaviare (FIP, 2020).⁶ Hay varias explicaciones para este desarrollo; la explicación principal es que se debe a los procesos de acaparamiento de tierras, particularmente por parte de terratenientes que buscan utilizar el vacío actual y la ausencia de control estatal para expandir sus tierras cortando grandes extensiones de bosques (Van Dexter y Visseren-Hamakers 2019, Murillo Sandoval et al.2020). Al poner ganado en áreas recientemente deforestadas, esperan poder reclamar estas tierras en el futuro. Dicho de otra manera, el acuerdo de paz y la desmovilización de las FARC aumentan

⁵ <https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/panfletos-firmados-por-disidencias-de-las-farc-invitan-deforestar-la-amazonia-articulo-914948>

⁶ <https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/la-deforestacion-va-a-un-ritmo-exagerado-con-o-sin-pandemia-488750>

las expectativas y las oportunidades de los terratenientes para obtener eventualmente títulos de propiedad legales. Por lo tanto, el proceso de paz debe, desafortunadamente, considerarse un impulsor involuntario del acaparamiento de tierras y los mercados ilegales de tierras (Murillo Sandoval et al. 2020).

Además de las graves consecuencias ambientales que conlleva la deforestación, también pone de manifiesto el problema subyacente que alimentó el conflicto armado en Colombia en primer lugar, a saber, el desigual acceso y control de la tierra en Colombia. Una pequeña minoría posee la mayoría de las tierras agrícolas del país. Irónicamente, esta distribución desigual fue perpetuada por los grupos armados durante el conflicto armado debido a los desplazamientos violentos de los pequeños agricultores, y ha aumentado desde la firma del acuerdo de paz (Guereña 2017).



Imagen 2 - La región fronteriza amazónica en el departamento de Guaviare con actividades agrícolas invasoras. Foto tomada por Torsten Krause, junio de 2017.



Imagen 3 - Parches recientes de deforestación en el departamento de Guaviare. Foto tomada por Torsten Krause, junio de 2017.

El aumento de las plantaciones de coca en los últimos 10 años es otro desarrollo perjudicial para el medio ambiente que complica la transición de Colombia hacia la paz (Fig. 2). Durante el conflicto armado, la producción y el comercio de cocaína fue una importante actividad generadora de ingresos para diferentes grupos armados. Las FARC, el ELN y los paramilitares la usaron para financiar sus operaciones, comprar armas, pagarles a sus soldados y ganar mucho dinero. La alta rentabilidad del producto demandado a nivel mundial, el sistema establecido desde el cultivo, producción y exportación, así como los conocimientos adquiridos en Colombia, facilitan la continuación del lucrativo comercio de cocaína. El comercio actual incluye algunos de los actores anteriores al acuerdo de paz, pero también nuevos que buscan controlar el negocio, especialmente los carteles mexicanos, como los carteles del Golfo, Sinaloa y Nuevo Jalisco.

Además, Colombia también ha experimentado un aumento en la extracción de minerales, como el oro y el coltán (Ballvé 2012, Guevara et al. 2016). Según algunas estimaciones, aproximadamente el 85% de la extracción de minerales preciosos en Colombia, dominada por el oro, es ilegal.⁷ Los grupos armados suelen participar en la extracción y comercialización

⁷ <https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/coronavirus-en-colombia-francia-marquez-explica-por-que-mineria-se-incrementara-tras-la-pandemia-490444>

ilegal de minerales. El uso de mercurio en el proceso de extracción está teniendo consecuencias devastadoras para la salud de poblaciones locales y para los ríos y bosques de las zonas de extracción. También se ha dado un aumento en los homicidios y masacres asociados con la extracción ilegal de oro (Guevara et al. 2016).

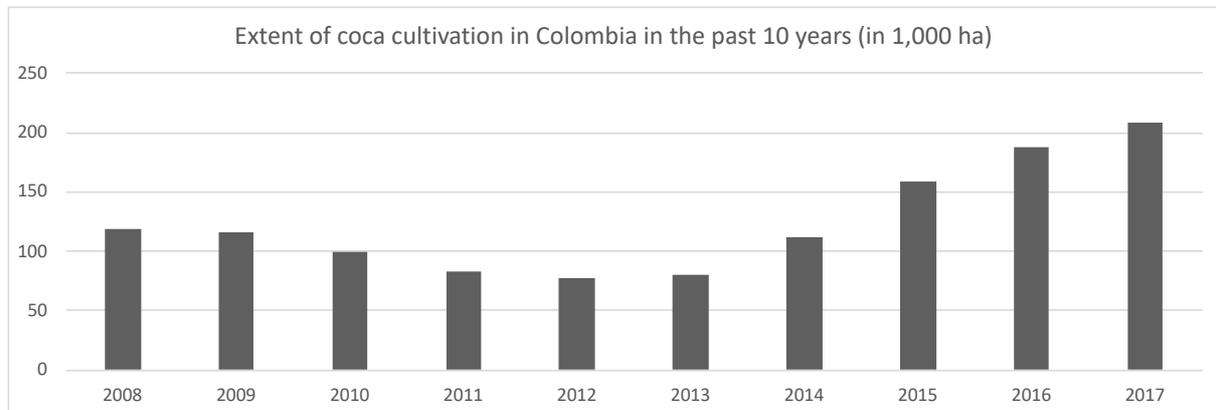


Figura 2 - Extensión del cultivo de coca en Colombia. Fuente: U.S. Office of National Drug Control Policy (ONDCP)

Un paso más atrás por Covid-19

Los retrocesos anteriormente mencionados posteriores a la firma del acuerdo de paz, en particular los impactos sociales y ambientales negativos, se están viendo exacerbados y reforzados por la actual pandemia causada por el Covid-19 (SARS-CoV-2). Además de sus efectos perjudiciales para la salud, la pandemia de Covid-19 se ha convertido en una poderosa fuerza social y política al ocupar y redirigir la atención política. La pandemia actual plantea una gran amenaza para la transición hacia la paz en Colombia y para el medio ambiente por las siguientes razones:

Primero, la crisis causada por la propagación del coronavirus y la consiguiente cuarentena estricta declarada en todo el país por el presidente Duque desde el 24 de marzo de este año, ha desviado una considerable atención y capacidad de respuesta, lejos de las tensiones en las zonas rurales y fronterizas (FIP, 2020, p. 16). Esto refuerza las brechas de gobernanza ya existentes en estas áreas, en un momento en que las comunidades vulnerables locales y el medio ambiente tienen una demanda aún mayor de protección.

Segundo, la violencia en las áreas rurales de Colombia ha continuado a pesar de la cuarentena, y ha habido numerosos registros de asesinatos de líderes sociales e indígenas durante la cuarentena y los toques de queda.⁸ La Fundación Ideas para la Paz (FIP) argumenta que los líderes sociales e indígenas pueden volverse más vulnerables durante la cuarentena a medida que sus rutinas y ubicaciones se vuelven más predecibles. En su reciente informe sobre la dinámica de la confrontación armada durante la pandemia, la FIP proporcionó evidencia que

⁸ <https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/los-rostros-y-luchas-de-los-lideres-sociales-asesinados-en-lo-corrido-del-2020-articulo-913792>

muestra que los ataques a los oleoductos también se han intensificado durante los primeros cuatro meses de 2020, mientras persisten las prácticas de deforestación y minería ilegal.

A pesar de estos desarrollos preocupantes, también hay algunas tendencias positivas. Por un lado, el número total de ataques llevados a cabo por grupos armados ha disminuido en abril. Esto puede explicarse por la declaración de cese al fuego del ELN con vistas a la crisis de la corona (FIP, 2020, p. 8). Del mismo modo, el número de muertes violentas ha disminuido constantemente desde principios de 2019 en los municipios que implementan iniciativas específicas basadas en el acuerdo de paz. Estas incluyen los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Programa Nacional para la Sustitución Integral de Cultivos Ilícitos (PNIS) (ibid., P. 13). Sin embargo, algunas áreas no han seguido esta tendencia positiva y, en cambio, han aumentado el número de muertos. Este es el caso en Santa Marta en el departamento de Magdalena, Tarazá y Segovia en Antioquia, y más notablemente en El Tambo en Cauca (22 muertes violentas entre enero y abril de 2020, en comparación con 8 durante el mismo período en 2019) (ibid., P. 15).

Con respecto al medio ambiente, los grupos armados, los colonos y los acaparadores de tierras se han trasladado aún más a las zonas boscosas, causando una deforestación masiva durante la crisis del coronavirus, mientras que las organizaciones ambientales, tanto públicas como privadas, pueden hacer aún menos debido a la cuarentena (FIP, 2020). El ejemplo de Brasil ofrece una perspectiva sombría de lo que está por suceder en las regiones amazónicas colombianas. En el vecino más grande de Colombia, la deforestación en la región amazónica se ha disparado considerablemente en las primeras semanas de la pandemia de Covid-19, también debido a la reducción del poder de implementación de las agencias ambientales nacionales.

Además de estas consecuencias sociales y ecológicas directas de la pandemia, se esperan fuertes impactos negativos indirectos, impulsados por la recesión económica mundial. La caída asociada en la demanda de petróleo ya ha resultado en una caída de sus precios, lo que, a su vez, ha implicado un aumento sustancial del precio del oro. Esto proporciona un incentivo para expandir aún más las actividades de extracción de oro y probablemente exacerbará la violencia y sus graves repercusiones sociales y ambientales (Guevara et al.2016, Rodríguez y Galvis 2016).

Como ejemplo de tal dinámica, el grupo indígena Wiwa, ubicado en el departamento de la Guajira en el norte del país, informó que, durante la pandemia, la minería ilegal de oro en su territorio ancestral se intensificó. Estudios realizados en el área antes de la pandemia ya habían revelado altas concentraciones de metales pesados en ríos y peces atribuibles a las actividades mineras.⁹ Estas actividades son llevadas a cabo por personas externas que portan armas y a menudo están vinculadas a grupos armados. Además de las preocupaciones inmediatas por la

⁹ <https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/la-mineria-ilegal-azota-al-territorio-wiwa/47864>

seguridad y el medio ambiente¹⁰, la comunidad Wiwa está preocupada por un mayor riesgo de infección de Covid-19 debido al ingreso de los mineros ilegales externos a la zona (FIP, 2020).

Un camino desafiante por delante

La transición de Colombia a la paz se encamina hacia un camino difícil y la pandemia de Covid-19 probablemente sea más que un obstáculo menor. Debido a sus principales consecuencias sociales y ambientales, puede socavar los pequeños esfuerzos positivos realizados hasta el momento hacia una paz sostenible.

¿A dónde nos lleva esto? Por un lado, y a pesar de estos desarrollos y dinámicas, muchas personas en Colombia todavía creen en el proceso de paz. El partido de las FARC, compuesto por líderes desmovilizados, con frecuencia restablece su compromiso con el proceso. Así mismo, continúan los esfuerzos para integrar a los excombatientes de las FARC en la vida civil. Algunos de estos esfuerzos incluyen proyectos agrícolas, programas de capacitación e iniciativas de conservación (por ejemplo, el Programa Ambientes para la Paz). Además, a pesar de que las conversaciones de paz con el ELN no han tenido éxito, algunos de sus miembros están comenzando a desmovilizarse.

Al mismo tiempo, al gobierno colombiano se le dificulta la construcción de una paz duradera y sostenible. Incluso antes de la pandemia actual, el gobierno había estado en un acto delicado de equilibrio. Por un lado, tenía que mantener su discurso de los esfuerzos para construir una paz duradera y satisfacer las demandas internacionales de conservación forestal y de los donantes de proyectos ambientales (Krause, 2020). Por otro lado, la presión por partes del gobierno y del sector privado para acelerar la extracción de recursos naturales en forma de minería, infraestructura y agricultura industrial ha aumentado (DNP 2018). Tales actividades son coherentes con el modelo tradicional de crecimiento económico extractivo que no ha contribuido a la paz ni a la protección del medio ambiente.

No hay duda de que los problemas sociales y ambientales de Colombia están considerablemente moldeados por las demandas del mercado mundial de productos agrícolas, petróleo, minerales y coca. A pesar de esto, existen razones internas fundamentales, comenzando con políticas gubernamentales que incentivan directa e indirectamente la degradación ambiental. Las fuertes desigualdades en el acceso a la tierra y la propiedad que han sido la base del conflicto armado por más de cinco décadas, aún no se han abordado lo suficiente. En cambio, las graves falencias en la aplicación de la ley para abordar el acaparamiento de tierras y la minería ilegal hacen la vista gorda ante la corrupción, la violencia y los asesinatos locales. Mientras estas contradicciones y deficiencias no se discutan abiertamente y se actúe de manera integral, el conflicto armado por los recursos y la tierra se perpetuará, y con ello la grave crisis social y ambiental en Colombia.

¹⁰ <https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/en-cuarentena-indigenas-denuncian-mineria-ilegal-en-su-territorio-490582>

Referencias

- Ballvé, T. 2012. Everyday State Formation: Territory, Decentralization, and the Narco Landgrab in Colombia. *Environment and Planning D: Society and Space* **30**:603-622.
- Clerici, N., D. Armenteras, P. Kareiva, R. Botero, J. P. Ramírez-Delgado, G. Forero-Medina, J. Ochoa, C. Pedraza, L. Schneider, C. Lora, C. Gómez, M. Linares, C. Hirashiki, and D. Biggs. 2020. Deforestation in Colombian protected areas increased during post-conflict periods. *Scientific Reports* **10**:4971.
- DNP. 2018. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Page 945 in D. N. d. Planeación, editor. Government of Colombia, Bogotá.
- FIP. 2020. Dinámicas de la Confrontación Armada y su Impacto Humanitario y Ambiental: Tendencias en la Pandemia – Enero a Abril 2020. Fundación Ideas para la Paz, Bogotá.
- Guereña, A. 2017. A Snapshot of Inequality - What the Latest Agricultural Census Reveals About Land Distribution in Colombia. Oxfam.
- Guevara, E. L., N. Duarte, and E. Salcedo-Albarán. 2016. Introduction to Trafficking of Gold and Coltan in Colombia. Vortex Foundation, Bogotá.
- Krause, T., Reducing deforestation in Colombia while building peace and pursuing business as usual extractivism? *Journal of Political Ecology*, 2020. **27**(1): p. 17.
- Murillo Sandoval, P. J., K. Van Dexter, J. Van Den Hoek, D. Wrathall, and R. Kennedy, E. . 2020. The end of gunpoint conservation: Forest disturbance after the Colombian peace agreement. *Environmental Research Letters*.
- Negret, P. J., L. Sonter, J. E. M. Watson, H. P. Possingham, K. R. Jones, C. Suarez, J. M. Ochoa-Quintero, and M. Maron. 2019. Emerging evidence that armed conflict and coca cultivation influence deforestation patterns. *Biological Conservation*:108176.
- Prem, M., S. Saavedra, and J. F. Vargas. 2018. End-Of-Conflict Deforestation: Evidence from Colombia's Peace Agreement. Universidad de Rosario, Bogotá.
- Rodríguez, C. A., and S. R. Galvis. 2016. El oro, la contaminación y los seres del agua. Visiones locales de los impactos ambientales de la minería en el mundo acuático de la Amazonia colombiana., Tropenbos Internacional Colombia.
- UN. 2020. Colombia: 'Staggering number' of human rights defenders killed in 2019. United Nations, n/a.
- Van Dexter, K., and I. Visseren-Hamakers. 2019. Forests in the time of peace. *Journal of Land Use Science*:1-16.
- Witness, G. 2017. *Environmental Activists*. Global Witness, London.
- Witness, G. 2019. *Enemies of the state? How governments and business silence land and environmental defenders*.